

EN LA MATERIA RELATIVA AL: Tratado de Libre Comercio de América del Norte;

Y EN EL ASUNTO SOBRE : Solicitud de los Estados Unidos Mexicanos de Acumulación de las reclamaciones en:

CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, INC.

c.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CASO CIADI N°. ARB(AF)/04/1

Y

ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY

Y

TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS, INC.

c.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CASO CIADI N°. ARB(AF)/04/5

ORDEN DEL TRIBUNAL DE ACUMULACIÓN

Ante el Tribunal de Arbitraje constituido con base en el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e integrado por:

Sr. Arthur W. Rovine, Árbitro

Sr. Eduardo Siqueiros, Árbitro

Sr. Bernardo M. Cremades, Presidente



**Representando a Corn Products
International, Inc:**

Sra. Lucinda A. Low
Sr. Myles S. Getlan
Sr. Joseph P. Whitlock
Miller & Chevalier Chartered

Sr. Robert E. Herzstein
Consejero Externo

**Representando a los Estados Unidos
Mexicanos:**

Lic. Hugo Perezcano Díaz
Lic. Luis Marín Barrera
Secretaría de Economía

Sr. Christopher J. Thomas, Q.C.
Thomas & Partners

Sr. Stephan E. Becker
Sr. Sanjay Mullick
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, LLP

**Representando a Archer Daniels
Midland Company y co-consejero para
Almex:**

Sr. Warren E. Connelly
Sra. Lisa M. Palluconi
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

**Representando a Tate & Lyle
Ingredients Americas, Inc. y co-
consejero para Almex:**

Sr. Daniel M. Price
Sr. Stanimir A. Alexandrov
Sidley Austin Brown & Wood LLP

**Participando en representación de
Canadá:**

Sr. Douglas Heath
Embajada de Canadá en Washington, D.C.

**Participando en representación de los
Estados Unidos de América:**

Sra. CarrieLyn Guymon
Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América

1. El 21 de octubre de 2003, Corn Products International, S.A. ("CPI"), una compañía constituida en el Estado de Delaware, presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI"), una Solicitud de Iniciación de Procedimientos de Arbitraje en contra de los Estados Unidos Mexicanos ("México") al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ("TLCAN"), por supuestas violaciones a los Artículos 1102, 1106 y 1110 del TLCAN, derivadas de la imposición de un impuesto especial, en vigor desde el 1 de enero de 2002, a los refrescos que contuvieren jarabe de maíz de alta fructosa. El 4 de agosto de 2004, Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc., (en adelante "ADM/Tate & Lyle" o "los accionistas de ALMEX"), dos compañías con sede en el Estado de Illinois y constituidas en el Estado de Delaware, presentaron una similar Solicitud de Iniciación de Procedimientos de Arbitraje en contra de México, basada en la misma medida tributaria.

2. El 8 de septiembre de 2004, México presentó una detallada solicitud de conformidad con el Artículo 1126 del TLCAN, persiguiendo la instalación un tribunal de arbitraje para decidir sobre la acumulación de las reclamaciones de CPI y ADM/Tate & Lyle. CPI y ADM/Tate & Lyle (en adelante, "las Demandantes") y México alcanzaron posteriormente un acuerdo sobre la composición y el mandato de un "Tribunal de Acumulación" que resolvería sobre la solicitud de México. El 8 de abril de 2005, México y las Demandantes presentaron una "Confirmación del Acuerdo de las Partes Contendientes sobre Consolidación," en que confirmaron la composición y el mandato del Tribunal de Acumulación conforme al Artículo 1126, pero en la que se estipuló que, en el evento que la acumulación fuere ordenada, las partes contendientes determinarían de común acuerdo la composición del panel que conocería de las reclamaciones acumuladas. La Confirmación del Acuerdo estableció también que todos los procedimientos del Tribunal de Acumulación se "regirían por las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, según hayan sido modificadas por los requisitos procesales del Capítulo XI del TLCAN."

3. La presentación de México respaldando la acumulación de las reclamaciones y las presentaciones de las Demandantes en oposición a la misma fueron recibidas por el CIADI el 11 de abril de 2005 y por el Tribunal de Acumulación el 12 de abril de 2005. Las partes contendientes, a través de sus representantes, presentaron argumentos orales y respondieron a las preguntas del Tribunal durante una audiencia celebrada en la sede del Centro en Washington, D.C. el 18 de abril de 2005. Representantes de los Gobiernos de Canadá y de los Estados Unidos de América estuvieron también presentes en la audiencia.
4. Para comenzar, el Tribunal expresa su agradecimiento a las partes por sus sobresalientes presentaciones escritas y orales. El Tribunal fue asistido en gran medida en el análisis de las preguntas y cuestiones ante él planteadas por los argumentos de las partes y la calidad de su defensa.
5. La cuestión planteada ante este Tribunal es si las reclamaciones del Artículo 1120 del TLCAN sometidas por CPI por una parte, y ADM/Tate & Lyle por otra, deben ser acumuladas en todo o en parte. Para emitir una orden de acumulación, el Tribunal de Acumulación debe primero estar "satisfecho" que los reclamaciones plantean "cuestiones en común de hecho o de derecho." Si ese requisito se cumple, el Tribunal puede, "en interés de una resolución justa y eficiente" de los reclamaciones emitir una orden de acumulación (Artículo 1126(2)).
6. El Tribunal de Acumulación acepta que las reclamaciones sometidas al arbitraje tienen ciertas cuestiones de hecho o de derecho en común para los efectos del Artículo 1126(2). El Tribunal por lo tanto debe considerar si, en el interés de una resolución justa y eficiente de las reclamaciones, debe conceder o denegar la solicitud de acumulación.
7. En este contexto, el Tribunal nota antes que nada que las partes no disputan que CPI y los accionistas de AIMEX son directos y "fieros competidores." México ha sostenido que estas partes podrían coordinar sus respectivas reclamaciones bajo el Capítulo XI en contra de México, pero no ha disputado que CPI y los accionistas de

ALMEX son competidores globales. Como tales, cada compañía enfatizó que no puede hacer conocido a la otra, ni ante un tribunal de arbitraje ni en cualquier otra parte, detalles relativos a la naturaleza de sus inversiones, estrategias comerciales, costos de producción, diseño de planta, efectos del impuesto en sus inversionistas e inversiones, y cualquier otro dato que deba ser presentado ante un tribunal encargado de examinar si ha habido o no discriminación, requisitos de desempeño ilegalmente impuestos, o una expropiación en los términos del Capítulo XI.

8. La competencia directa y principal entre las Demandantes, y la consiguiente necesidad de complejas medidas de confidencialidad a través del proceso del arbitraje, haría la acumulación, total o parcial, en este caso, extremadamente difícil. Las partes no estarían en posición de trabajar juntas y compartir información. El proceso, incluyendo acuerdos esenciales de confidencialidad, producción de documentos, presentaciones escritas y argumentos orales, tendrían que tramitarse, en medida substancial, por vías separadas. La acumulación de las reclamaciones de competidores directos y principales tendría como resultado, necesariamente, un procedimiento lento y complejo, para proteger la confidencialidad de información delicada.

9. El Tribunal considera que la competencia entre las Demandantes afectará desfavorablemente su habilidad en un procedimiento acumulado para presentar sus casos en plenitud. El debido proceso es fundamental en cualquier procedimiento de solución de controversias, y las partes no deben tener que calcular que parte de la información, evidencia, documentos y argumentos pueden compartir con sus competidores y cuales no. El tribunal que conoce de las reclamaciones no debiera tener que establecer procedimientos separados para acomodar las sensibilidades que en materia de competencia pudieran conllevar la evidencia y presentaciones de los diferentes demandantes. En estas circunstancias, una orden de acumulación no puede ser en el interés de una resolución justa y eficiente de las reclamaciones. Dos tribunales pueden manejar dos casos separados de una manera más justa y eficiente que un tribunal donde los dos demandantes son competidores directos y principales y las reclamaciones generan cuestiones de competencia y sensibilidad comercial.

10. México sostiene que toda información confidencial puede y será protegida en procedimientos acumulados, y que las cuestiones de la competencia y la confidencialidad estarían presentes aún en el evento de procedimientos separados. Sin embargo la información confidencial entre competidores sería mucho más fácilmente protegida en procedimientos separados, que, asimismo, permitirían un procedimiento de arbitraje mucho más eficiente en estas circunstancias. Los competidores que someten reclamaciones al amparo del Artículo 1120 no debieran ser obligados a arriesgar (a) no ser capaces de presentar sus casos en plenitud; o (b) tener que compartir información confidencial y de negocios con su competidores; o (c) procedimientos paralelos dentro del marco de un procedimiento arbitral, que, necesariamente, serán mucho más lentos y menos eficientes que procedimientos ante tribunales separados.

11. En gran medida a causa de su fuerte competencia, las Demandantes no desean tener sus reclamaciones acumuladas. ¿Tienen sus preferencias importancia alguna? El artículo 1126 no contempla las preferencias en contra de la acumulación. No obstante ello, la autonomía de las partes parece haber jugado un papel de importancia en el establecimiento convenido del Tribunal de Acumulación y las reglas de procedimiento pactadas. Las partes "complementaron" las reglas sobre nombramiento y las disposiciones del Artículo 1126, con la participación y el acuerdo del Gobierno de México, y sin objeción de los Gobiernos de Canadá y los Estados Unidos de América. Los representantes de Canadá y de los Estados Unidos de América estuvieron presentes en la audiencia, y, subsiguientemente ambos gobiernos indicaron por cartas al Tribunal que no harían presentaciones conforme al Artículo 1128 del TLCAN, en el procedimiento de acumulación.

12. Pareciera derivarse de lo anterior que, dado que la autonomía de las partes, a lo menos para ciertos limitados propósitos, ha sido entendida como subsumida en el Artículo 1126, lo que ha sido aceptado por los tres Estados partes del TLCAN y por las partes privadas en este procedimiento de acumulación, la autonomía de las partes debe ser una consideración relevante a ser tomada en cuenta en la interpretación y aplicación del Artículo 1126 en este caso. El Tribunal nota que tres de las cuatro partes contendientes no

desca que las reclamaciones sean acumuladas, ni en todo ni en parte, en gran medida, debido al problema de la competencia directa. El Tribunal percibe esos deseos como un elemento relevante al evaluar la justicia de la acumulación propuesta.

13. México argumentó, persuasivamente, que las reclamaciones presentadas por CPI y ADM/Tate & Lyle son casi iguales, que las cuestiones de fondo sobre la responsabilidad del Estado serían las mismas, y que si bien podría haber diferencias importantes entre las Demandantes con respecto a los daños, esas diferencias no justificarían procedimientos separados. México instó al Tribunal a fijarse en la redacción de las reclamaciones presentadas por CPI y ADM/Tate & Lyle, cuya redacción, en efecto, es muy similar. México sostuvo también que el problema de competencia/confidencialidad era insuficiente como base para denegar su solicitud.

14. CPI y los accionistas de ALMEX, por otro lado, apuntan a estrategias de negocios diferentes entre las Demandantes, inversiones diferentes, mercados, tecnología, costos, e impactos diferentes del impuesto. Las diferentes expectativas al momento de invertir fueron citadas también, todo lo cual podría representar diferentes cuestiones de hecho en los términos del Artículo 1126(2). Los accionistas de ALMEX indicaron que su "plan estratégico deberá ser revelado al Tribunal durante los subsiguientes procedimientos bajo un orden de protección." (traducción del Tribunal). Citaron su incapacidad para revelarlo en los procedimientos ante este Tribunal, y las diferencias con el plan de CPI, como una ilustración del problema de competencia/confidencialidad. CPI sostuvo que las reclamaciones de los accionistas de ALMEX eran principalmente de carácter comercial y que darían lugar a problemas jurisdiccionales. Los accionistas de ALMEX no aceptaron estas representaciones por CPI. Pero las Demandantes tienen muy claro que sus inversiones se basaron en estrategias comerciales diferentes, que sus objetivos de mercado e inversiones eran diferentes, y que el impuesto tendría un impacto substancialmente diferente en ellas. México no disputó el diferente impacto del impuesto, pero mantuvo que la atención del Tribunal debía fijarse en la similitud de las reclamaciones (en la forma en que se presentaron ante el CIADI) de las Demandantes. Más aún, como CPI indicó en su presentación escrita, México no indicó, aparte de

posibles excepciones a la jurisdicción, las defensas comunes que planea oponer a las reclamaciones. México no está requerido bajo el Artículo 1126 a indicarlo, pero habría ayudado a la posición de México en términos de evaluar el significado de cuestiones comunes de hecho o de derecho.

15. El Tribunal está persuadido que, pese a la existencia de ciertas cuestiones comunes de hecho y de derecho, las numerosas distintas cuestiones de responsabilidad del estado y cuantificación de los daños confirman aún más la necesidad de procedimientos separados.

16. México sostiene, también persuasivamente, que con procedimientos separados se arriesgan laudos contradictorios en perjuicio de México y que los laudos contradictorios no pueden constituir una "justa" resolución de las reclamaciones. Las Demandantes, por su parte, están dispuestas a correr el riesgo de laudos contradictorios. El Tribunal cree que el riesgo de laudos contradictorios es menor en estos casos dado que las reclamaciones aparecen ser suficientemente diferentes entre si, con respecto a la responsabilidad del estado y la cuantificación de los daños. Este Tribunal no tiene ante si un gran número de demandantes idénticos o similares. El impacto del impuesto puede diferir también en términos de una posible responsabilidad de México. El impuesto podría, por ejemplo, constituir una expropiación respecto de un demandante, pero no del otro. Asumiendo expropiación, lo que ciertamente será refutado por México, el cálculo de los daños diferirá entre las tres Demandantes. Laudos distintos en cuanto a responsabilidad y daños no implican, necesariamente, laudos contradictorios.

17. En todo caso, el Tribunal de Acumulación está satisfecho con que el riesgo de la injusticia para México resultante de laudos contradictorios emitidos en procedimientos separados no puede pesar más que la injusticia a los Demandantes por las ineficiencias procesales que surgirían en procedimientos acumulados, por las razones arriba explicadas.

18. El Tribunal también considera que el problema de la demora es relevante a la cuestión de la justicia y la eficiencia de la acumulación. Como se ha hecho notar, CPI presentó su Solicitud de Iniciación de Procedimientos de Arbitraje al CIADI el 21 de octubre de 2003, mientras ADM/Tate & Lyle presentó su Solicitud de Iniciación de Procedimientos de Arbitraje el 4 de agosto de 2004. El 8 de septiembre de 2004, México presentó una solicitud de acumulación. CPI está actuando ante un tribunal constituido y ha presentado su memorial sobre cuestiones de responsabilidad del Estado. ADM/Tate & Lyle no tienen todavía un tribunal constituido. El Tribunal de CPI, en su Resolución Procesal No. 2 de 14 de enero de 2005, decidió no suspender su procedimiento, no obstante la solicitud de México en tal sentido, indicando que "el Tribunal [del caso CPI], si bien no se encuentra en esta fase indagando las causas, está preocupado por el hecho que haya transcurrido tanto tiempo desde la fecha en que la reclamación fue presentada."

19. El Tribunal de Acumulación comparte la preocupación del Tribunal del caso CPI. La acumulación de las reclamaciones de CPI y ADM/Tate & Lyle, total o parcial, requeriría un calendario para presentaciones escritas y orales que acomodara a cuatro partes. Procedimientos complejos o de dos vías se tendrían que establecer para proteger información confidencial y derechos de propiedad en cada etapa del procedimiento. No sólo tendrían las Demandantes que ejercer un extraordinario cuidado para evitar revelar tal información al otro, sino que México tendría sus propias dificultades al presentar respuestas a reclamaciones cuidándose de no revelar en su evidencia, respuestas escritas y argumentos orales, información confidencial y derechos de propiedad de una parte a la otra. Si, alternativamente, los casos siguieran caminos separados, para protegerse del riesgo de laudos contradictorios el tribunal tendría que esperar hasta que cada caso fuera completado para emitir su laudo final. Dado que los casos no están cerca procesalmente hablando, el resultado, necesariamente, sería un sustancial retraso en el proceso decisorio, en particular para CPI y México en el caso presentado por CPI. A juicio del Tribunal, la complejidad y demora adicionales confirman que "una resolución justa y eficiente" de las reclamaciones, en los términos del Artículo 1126, no podría darse.

20. Por las razones que se han enunciado, la solicitud de acumulación de los Estados Unidos Mexicanos es rechazada.

21. CPI ha reclamado el reembolso de sus costas procesales y profesionales relacionadas con la solicitud de México. La solicitud de México y la audiencia ante este Tribunal de Acumulación ha significado que todas las partes han tenido la oportunidad y el beneficio de indagar en el medio más apropiado para conducir el arbitraje de sus reclamaciones. En estas circunstancias, el Tribunal de Acumulación decide que cada parte debe asumir sus propios gastos y honorarios de abogados y que un 50% de los honorarios y gastos de los miembros del tribunal y de los gastos y de las cargas del CIADI deben ser soportados por México, 25% por CPI, y 25% por los accionistas de ALMEX.

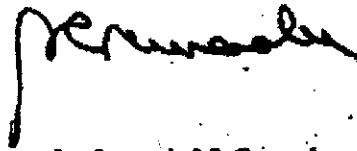
Habo en Washington D.C. a 20 de Mayo de 2005.



Sr. Arthur W. Rovine
Árbitro



Sr. Eduardo Siqueros
Árbitro



Sr. Domingo M. Cruzado
Presidente del Tribunal

IN THE MATTER OF: The North American Free Trade Agreement;

AND IN THE MATTER OF: A Request for Consolidation by the United Mexican States of the claims in:

CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, INC.

v.

UNITED MEXICAN STATES
ICSID CASE N°. ARB(AF)/04/1

AND

ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY

AND

TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS, INC.

v.

UNITED MEXICAN STATES
ICSID CASE N°. ARB(AF)/04/5

ORDER OF THE CONSOLIDATION TRIBUNAL

**Before the Arbitral Tribunal constituted under
Chapter 11 of the North American Free Trade
Agreement and comprised of:**

Mr. Arthur W. Rovine, Arbitrator
Mr. Eduardo Siqueiros, Arbitrator
Mr. Bernardo M. Cremades, Presiding Arbitrator

**Representing Corn Products
International, Inc:**

Ms. Lucinda A. Low
Mr. Myles S. Getlan
Mr. Joseph P. Whitlock
Miller & Chevalier Chartered

Of Counsel: Mr. Robert E. Herzstein

**Representing the United Mexican
States:**

Lic. Hugo Perezcano Díaz
Lic. Luís Marín Barrera
Secretaría de Economía

Mr. Christopher J. Thomas, Q.C.
Thomas & Partners

Mr. Stephan E. Becker
Mr. Sanjay Mullick
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, LLP

**Representing Archer Daniels and Co-
counsel to Almex:**

Warren E. Connelly
Lisa M. Palluconi
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

**Representing Tate & Lyle and Co-
counsel to Almex:**

Mr. Daniel M. Price
Mr. Stanimir A. Alexandrov
Sidley Austin Brown & Wood LLP

Appearing on behalf of Canada:

Mr. Douglas Heath
Embassy of Canada in Washington, D.C.

**Appearing on behalf of the United
States of America:**

Ms. CarrieLyn Guymon
U.S. Department of State

1. On 21 October 2003, Corn Products International, Inc. ("CPI"), a company incorporated in the State of Delaware, submitted a Request for Institution of Arbitration Proceedings to the International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") against the United Mexican States ("Mexico") under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement ("NAFTA"), for alleged breaches of Articles 1102, 1106 and 1110 of NAFTA arising from the imposition of an excise tax with effect from January 1, 2002 on soft drinks containing high fructose corn syrup. On 4 August 2004, Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. (hereinafter "ADM/Tate & Lyle" or "the ALMEX shareholders"), two Illinois based companies incorporated in the State of Delaware, submitted a similar Request for Institution of Arbitration Proceedings against Mexico, based on the same tax measure.

2. On 8 September 2004, Mexico submitted a detailed request, pursuant to NAFTA Article 1126, seeking the establishment of an arbitral tribunal to decide whether to consolidate the CPI and ADM/Tate & Lyle claims. CPI and ADM/Tate & Lyle (hereinafter collectively "the claimants") and Mexico subsequently reached agreement on the membership and mandate of a "Consolidation Tribunal" to rule on Mexico's request. On 8 April 2005, Mexico and the claimants submitted a "Confirmation of Agreement of the Disputing Parties Regarding Consolidation" which confirmed the membership and mandate of the Consolidation Tribunal pursuant to Article 1126, but stipulated that should consolidation be ordered, the disputing parties would by agreement amongst themselves determine the composition of the panel to hear the consolidated claims. The Confirmation Agreement also stipulated that all proceedings of the Consolidation Tribunal were to be "governed by the ICSID Additional Facility Arbitration Rules, as modified by the procedural requirements of NAFTA Chapter Eleven."

3. Mexico's submission supporting consolidation and the claimants' submissions in opposition thereto were received by ICSID on 11 April 2005 and by the Consolidation Tribunal on 12 April 2005. The disputing parties, through their counsel, presented oral arguments and responded to the Tribunal's inquiries at a hearing held at the seat of the centre in Washington, D.C. on 18 April 2005. Representatives from the Governments of Canada and the United States also attended the hearing.
4. At the outset, the Tribunal expresses its appreciation to the parties for their outstanding written submissions and oral presentations. The Tribunal was greatly assisted in its analysis of the questions and issues before it by the parties' arguments and by the high quality of their advocacy.
5. The question before this Tribunal is whether the NAFTA Article 1120 claims submitted by CPI on the one hand, and ADM/ Tate & Lyle on the other, should be consolidated in whole or in part. In order to issue an order of consolidation, the Consolidation Tribunal must first be "satisfied" that the claims have "a question of law or fact in common." If that requirement is met, the Tribunal may, "in the interests of fair and efficient resolution of the claims," issue a consolidation order (Article 1126(2)).
6. The Consolidation Tribunal accepts that the claims submitted to arbitration do have certain questions of law or fact in common for purposes of Article 1126(2). The Tribunal must therefore consider whether in the interests of the fair and efficient resolution of the claims it should grant or refuse the consolidation order.
7. In this regard, the Tribunal notes first and foremost that the parties do not dispute that CPI and the ALMEX shareholders are direct and "fierce competitors." Mexico has maintained that these parties could coordinate their respective Charter 11 claims against Mexico, but has not disputed that CPI and the ALMEX shareholders are global competitors. As such, each company emphasized that it cannot make known to the other, before an arbitration tribunal or anywhere, details as to the nature of its investments, business strategies, production costs, plant design, the effect of the tax on

their investors and investments, and other data that must be put to a tribunal engaged in examining whether or not there has been discrimination, illegal performance requirements, or an expropriation within the meaning of Chapter 11.

8. The direct and major competition between the claimants, and the consequent need for complex confidentiality measures throughout the arbitration process, would render consolidation in this case, in whole or in part, extremely difficult. The parties would not be in a position to work together and share information. The process, including essential confidentiality agreements, discovery, written submissions and oral arguments would have to be carried out, in substantial measure, on separate tracks. The consolidation of the claims of direct and major competitors would necessarily result in complex and slow proceedings in order to protect the confidentiality of sensitive information.

9. The Tribunal considers that the competition between the claimants will adversely affect their ability in a consolidated proceeding to be fully able to present their cases. Due process is fundamental to any dispute resolution procedure, and the parties should not have to calculate which items of information, evidence, documents and arguments they can share with their competitors and which ones they cannot share. The tribunal hearing the claims should not have to require separate procedures to accommodate the competitive sensitivity of the evidence and submissions of the different claimants. Under such circumstances, a consolidation order cannot be in the interests of fair and efficient resolution of the claims. Two tribunals can handle two separate cases more fairly and efficiently than one tribunal where the two claimants are direct and major competitors, and the claims raise issues of competitive and commercial sensitivity.

10. Mexico maintains that all confidential information will and can be protected in consolidated proceedings, and that the issue of competition and confidentiality are present even with separate proceedings. However, confidential information among competitors is much more easily protected in separate proceedings, which in turn also permit a far more efficient arbitration process under such circumstances. Competitors

who file Article 1120 claims should not be compelled to risk (a) not being able fully to present their cases; or (b) having to share confidential and sensitive business information with their competitor; or (c) a parallel proceeding *within one arbitral process* that will necessarily be far slower and less efficient than proceedings before separate tribunals.

11. Largely because of their strong competition, the claimants do not wish to have their claims consolidated. Are their preferences of any significance? Article 1126 does not address preferences against consolidation. Yet party autonomy has appeared to play a role of some importance *in the agreed establishment of the Consolidation Tribunal and its agreed rules of procedure*. The parties "contracted around" the appointment and rules provisions of Article 1126, with the affirmative participation and agreement of the Government of Mexico, and without objection from the Governments of Canada and the United States of America. Representatives of Canada and the United States of America attended the hearing, and subsequently both Governments stated in letters to the Tribunal that they were not going to file submissions, pursuant to NAFTA Article 1128, on the consolidation proceedings.

12. It would appear to follow that since party autonomy, at least for *certain limited purposes*, has been read into Article 1126 and accepted by all three NAFTA treaty states as well as by the private parties in this consolidation proceeding, party autonomy should be a relevant consideration to be taken into account in the interpretation and application of Article 1126 in this case. The Tribunal notes that three of the four parties before it do not wish to have the claims consolidated, either in whole or in part, in large measure because of the direct competition problem. The Tribunal views those wishes as a relevant consideration in evaluating the fairness of the proposed consolidation.

13. Mexico argued, with persuasive force, that the claims submitted by CPI and ADM/Tate & Lyle are very much the same, that the merits issues of state responsibility would be the same, and that while there might be important differences between the claimants with respect to damages, those differences did not justify separate proceedings. Mexico urged the Tribunal to focus on the wording of the claims submitted by CPI and

ADM/Tate & Lyle, and indeed, the wording of those claims is very similar. Mexico also maintained that the competition/confidentiality problem was insufficient as a basis for denying Mexico's request.

14. CPI and the ALMEX shareholders, on the other hand, point to different strategic business plans for the claimants, different investments, markets, technology, costs, and different impacts of the tax. Differing expectations in making the investments were also cited, all of which could represent different questions of fact within the meaning of Article 1126(2). The ALMEX shareholders stated that their "strategic plan will need to be disclosed to the Tribunal during subsequent proceedings under a protective order." They cited their inability to disclose it in the proceedings before this Tribunal, and how it differs from the CPI plan, as an illustration of the competition/confidentiality problem. CPI maintained that the ALMEX shareholders' claims were primarily trade related and raised jurisdictional problems. The ALMEX shareholders did not accept these representations by CPI. But the claimants were clear that their investments were based on different business strategies, that their market focus and investments were different, and that the tax would have a substantially dissimilar impact on the claimants. Mexico did not dispute the different impact of the tax, but maintained that the Tribunal's focus should be on the close similarity of the claims as initially submitted to ICSID by the claimants. Yet, as CPI pointed out in its written submission, Mexico did not indicate, apart from jurisdiction, common defenses it intends to raise to the claims. Mexico is not required under Article 1126 to so indicate, although it might have been helpful to Mexico's position in terms of evaluating the significance of any common questions of law or fact.

15. The Tribunal is persuaded that notwithstanding certain common questions of fact and law, the numerous distinct issues of state responsibility and quantum further confirm the need for separate proceedings.

16. Mexico maintains, also with persuasive force, that separate proceedings risk inconsistent awards, to the prejudice of Mexico, and that inconsistent awards cannot

constitute a "fair" resolution of the claims. The claimants, on the other hand, are willing to accept the risk of inconsistent awards. The Tribunal believes that inconsistent awards are not a major risk in these cases since the claims do appear to be sufficiently different, with respect to both state responsibility and quantum. This Tribunal does not have before it a large number of identically or very similarly situated claimants. The impact of the tax may well differ in terms of the potential liability of Mexico. The tax could, for example, constitute an expropriation as to one claimant, but not another. Assuming expropriation, which will certainly be contested by Mexico, the quantum calculations will differ among the three claimants. Different awards as to liability and damages do not necessarily indicate inconsistent awards.

17. In any event, the Consolidation Tribunal is satisfied that the risk of unfairness to Mexico from inconsistent awards resulting from separate proceedings cannot outweigh the unfairness to the claimants of the procedural inefficiencies that would arise in consolidated proceedings, for the reasons explained above

18. The Tribunal also considers that the problem of delay is relevant to the question of the fairness and efficiency of consolidation. As noted, CPI submitted its Request for Institution of Arbitration Proceedings to ICSID on October 21, 2003, while ADM/Tate & Lyle submitted their joint Request for Institution of Arbitration Proceedings on August 4, 2004. On September 8, 2004, Mexico filed a request for consolidation. CPI is before an established tribunal and has submitted its Memorial on Issues of State Responsibility. ADM/Tate & Lyle as yet have no tribunal. The CPI Tribunal, in its Procedural Order No. 2 dated 14 January 2005, decided not to suspend its proceedings despite a request from Mexico that it do so, stating that "the [CPI] Tribunal, while not at this stage seeking to inquire into the causes, is concerned by the fact that such a long period has elapsed since the claim was filed."

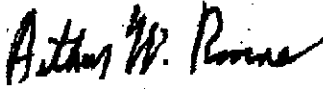
19. The Consolidation Tribunal shares the concern of the CPI Tribunal. Consolidation of the CPI and ADM/Tate & Lyle claims, in whole or in part, would require a briefing and hearing schedule to accommodate four parties. Complex

procedures would have to be established to protect confidential and proprietary information at every point in the process. Not only would the claimants have to take extraordinary care to avoid revealing such information to the other, but Mexico would have its own difficulties in submitting responses to claims while taking care not to provide in its evidence, written responses and oral arguments confidential and proprietary information from one party to the other. If, alternatively, the cases were on separate tracks, to guard against any risk of inconsistent awards the tribunal would have to await the completion of each of the cases before issuing its final award. But since the cases are not close to procedural alignment, the necessary result would be a very substantial delay in decision making, particularly for CPI, and for Mexico in the case brought by CPI. In the Tribunal's judgment, adding further complexity and delay confirms that the tests of "fair and efficient resolution of the claims," within the meaning of Article 1126, cannot be met.

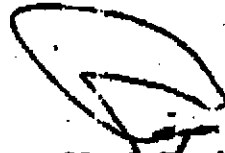
20. For the foregoing reasons, Mexico's request for consolidation is rejected.

21. CPI has sought its costs and attorneys' fees associated with responding to Mexico's request. The request by Mexico and the hearing before this Consolidation Tribunal have meant that the parties have all had the opportunity and the benefits of an inquiry into the most appropriate means to conduct the arbitration of their claims. In these circumstances the Consolidation Tribunal decides that each party should bear its own costs and attorneys fees, and that 50% of the fees and expenses of the members of the tribunal and the expenses and charges of ICSID should be borne by Mexico, 25% by CPI, and 25% by the ALMEX shareholders.

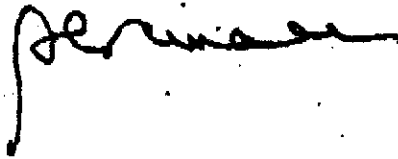
Made at Washington D.C. this 20th day of MAY, 2005.



Mr. Arthur W. Rovine
Arbitrator



Mr. Eduardo Siqueros
Arbitrator



Mr. Bernardo M. Cordero
Presiding Arbitrator

International Centre for Settlement of Investment Disputes

1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433 U.S.A.
 Telephone: (202) 458-1534 Faxes: (202) 522-2615 / (202) 522-2027
 Website: www.worldbank.org/icsid

May 20, 2005

Corn Products International, Inc.
 c/o Ms. Lucinda A. Low and Messrs.
 Robert E. Hertzstein and Joseph E. Whitlock
 Miller & Chevallier Chartered
 655 Fifteenth Street, N.W., Suite 900
 Washington, D.C. 2005-5701

Archer Daniels Midlands Company and
 Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc.
 c/o Mr. Warren E. Connelly
 and Ms. Lisa M. Palluconi
 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
 1333 New Hampshire Avenue, N.W.
 Washington, D.C. 20036
 and
 c/o Messrs. Daniel M. Price and
 Stanimir A. Alexandrov
 Sidley Austin Brown & Wood LLP
 1501 K Street, N.W.
 Washington, D.C. 20005

United Mexican States
 c/o Mr. Hugo Perezcano Díaz
 Director General de Consultoría Jurídica
 de Negociaciones
 Secretaría de Economía
 Alfonso Reyes #30
 Delegación Cuauhtémoc
 C.P. 06140
 México, D.F.



Ref: **Corn Products International, Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/04/1); Archer Daniels Midlands Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/04/5); Request for Consolidation.**

Dear Mesdames and Sirs,

Please find attached an advance signed copy of the May 20, 2005 Order of the Consolidation Tribunal in the above proceedings, in English and Spanish. Certified copies of the Order will be sent to you shortly.

Sincerely yours,


 Gonzalo Flores
 Secretary of the Consolidation Tribunal

Attachment

c.c. (with attachment):

Dr. Bernardo Cremades
 Mr. Arthur W. Rovine
 Lic. Eduardo Siqueiros

**International Centre for Settlement
of Investment Disputes**

1818 H Street, N.W., MSN MC6-611, Washington, D.C. 20433 U.S.A.
Tel: (202) 458-1534 • Fax: (202) 522-2615/2027

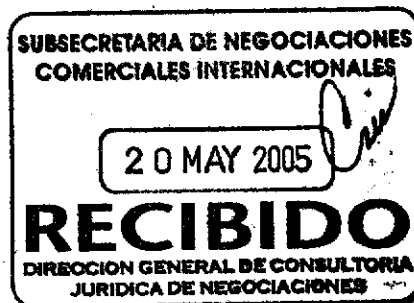
FACSIMILE COVER SHEET AND MESSAGE**DATE:** 20 de mayo de 2005**NO. OF PAGES:** 23
(including cover sheet)**TO:** Lic. Hugo Perezcano Díaz
Title: Director General de Consultoría Jurídica
de Negociaciones**FAX NO.:** (9011-5255) 5729-9310/09

Organization: Secretaría de Economía

City/Country: México, D.F., México

FROM: Gonzalo Flores
Title: Consejero Jurídico Principal
Dept/Div: CIADI
Mail Stop No.: MC6-611**FAX NO.:** (202) 522-2615/2027
Telephone: (202) 458-1505**SUBJECT:** Corn Products International, Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/04/1);
Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. United
Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/04/5); Request for Consolidation**MESSAGE:**

Por favor vea lo adjunto.



Transmission authorized by: Gonzalo Flores, Consejero Jurídico Principal, CIADI

If you experience any problems in receiving this transmission, inform the sender at the telephone or fax no. listed above.